



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 001 31 05 **014 2018 00335 01**
DEMANDANTE: MARÍA DEYANIRA MONSALVE RODRÍGUEZ
DEMANDADOS: GUSTAVO LEÓN CASTAÑO POSADA (QEPD), OLGA INÉS,
MARÍA CECILIA y GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO
RODRÍGUEZ

Medellín, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022, por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare que *«entre las partes existió relación laboral solidaria»*, y en consecuencia, se condene a los demandados en forma solidaria y principal al pago del trabajo en tiempo suplementario, salarios insolutos, reajuste de las cesantías, de los intereses a las cesantías, de las vacaciones, \$900.000 por año o fracción proporcional, como indemnización por falta de entrega de calzado y vestido de labor, la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990; indexación, perjuicios materiales y morales, más la pensión sanción, el reajuste de las cotizaciones en pensión a Porvenir SA *«con su respectivo cálculo actuarial durante todo el tiempo que duró la relación laboral y que no se cotizó para pensiones en subsidio»* de la pensión sanción. De manera subsidiaria

solicita que se pague la sanción de los arts. 64 (por despido indirecto), 65, y 254 CST (págs. 6, 7 arch. 4 C01).

Al subsanar la demanda desistió de las pretensiones relativas a la declaratoria de ineficacia de la terminación del vínculo y del reintegro con las consecuencias de este (págs.. 82, 83 arch. 4 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que mediante un contrato de trabajo verbal a término indefinido le prestó servicios en forma personal como “*empleada doméstica interna*” a los demandados en su casa de habitación ubicada en el barrio Villahermosa de Medellín, entre el 30 de julio de 2003 y el 30 de mayo de 2015, tiempo en el que se ocupó de los menesteres propios de la casa, preparó alimentos, arregló la casa y la ropa, los atendió personalmente, cuidó la casa cuando estaba sola y cumplió las demás órdenes impuestas por sus empleadores en un horario de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m. y los sábados de 7 a. m. a 2 p. m., por lo que excedía el límite de 48 horas y generó trabajo en tiempo suplementario durante 24 horas extras semanales, que nunca le fueron pagadas; devengó \$200.000 mensuales hasta el 4 de julio de 2004, \$220.000 hasta el 31 de diciembre de 2005, \$240.000 en el año 2006, \$260.000 en el 2007, \$280.000 en el 2008, \$305.000 en el 2009, \$320.000 en el 2010 y 2011, \$340.000 en el 2012, \$360.000 en el 2013, \$380.000 en el 2014 y \$400.000 en el 2015.

Por tal motivo, asegura que le adeudan los reajustes al salario y demás acreencias laborales porque siempre fueron canceladas en montos inferiores al SMLMV para cada año; *«en razón de su edad y de la inseguridad que le causaba la falta de aportes para pensión, solicitó su pago a los demandados y ante la negativa de ellos a cumplir con sus obligaciones patronales»* presentó renuncia motivada el 30 de mayo de 2015, sin embargo, más adelante sostuvo que *«el despido inesperado e injusto (...) le produjo (...) la sensación de tristeza, pesadumbre, angustia, derrota, temor por el futuro y los sumió en la más paupérrima de las situaciones económicas, los hizo sentir vergüenza ante su familia porque no pudo continuar respondiendo con la obligación económica del hogar como siempre lo ha hecho»*; nunca fue afiliada al sistema general de seguridad social integral, no le pagaron los aportes a pensión ni le entregaron vestido y calzado de labor; el 25 de junio de 2015 mediante una transacción los demandados le consignaron \$10.000.000 por concepto de reajuste de salario, horas extras y demás prestaciones sociales; a la fecha de presentación de la

demanda cuenta con 81 años de edad. El 13 de mayo de 2015 cedió parcialmente a su abogado *«a título gratuito y con fines estrictamente procesales»* los derechos litigiosos del presente proceso *«todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan corresponderle (con excepción de la seguridad social)»* (págs.. 1-6, 17, 18, 76, 77 arch. 4 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación la demanda fue admitida mediante auto del 9 de julio de 2018 ordenándose la notificación y traslado a los demandados (págs. 84, 85 arch. 4 C01), quienes contestaron dentro del término respectivo.

Los demandados representados a través del mismo abogado contestaron en sendos escritos, así: **Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez**, se opuso a las pretensiones, pues afirmó que no vivía en la casa de su padre, Gustavo León Castaño Posada, quien fue el único empleador de la demandante, y pese a que lo visitó algunos fines de semana en los que por disposición de su padre, recibió algunos servicios de la demandante, nunca fue beneficiario directo de tal prestación de servicios ni le dio órdenes para tal efecto (págs. 98-103, 174-178 archs. 4, 9 C01). **Olga Inés Castaño Rodríguez**, contestó en similar sentido tras aducir que vive en Miami, Florida Estados Unidos desde 1994, motivo por el cual solo visita la casa de su padre en algunas temporadas, sin que emita alguna orden en cabeza de la demandante (págs. 141-146 *idem*). **María Cecilia Castaño Rodríguez**, adujo que aun cuando vivió en casa de su padre para la época en la que la demandante inició labores y por un tiempo más, la cual estuvo ubicada en la Calle 60 n° 37 – 54 de Medellín, nunca le dio órdenes, ni le pagaba el salario, porque eso lo disponía su padre, quien le suministraba un uniforme compuesto por camisa, pantalón y zapatos (págs. 154-160 *idem*); los 3 propusieron como excepción de mérito la inexistencia de la obligación.

Finalmente, las 3 personas mencionadas allegaron un escrito en el que manifestaron aceptar la herencia de **Gustavo León Castaño Posada (QEPD)**, con beneficio de inventario en su calidad de hijos herederos, y en ese sentido contestaron a través del mismo apoderado que, su padre otorgó poder desde el 25 de enero de 2019 para contestar la demanda y le manifestó al abogado que fue empleador de la demandante entre el 30 de julio de 2003 y el 30 de mayo de 2015 con una jornada pactada de lunes a sábado de 6 horas diarias para

completar 36 a la semana, tiempo en el que la demandante desempeñó servicios domésticos internos tales como preparar el desayuno, asear la ropa y limpiar la casa de aproximadamente 120 m2, a cambio de 1 SMLMV pagadero una parte en efectivo y otra en especie, representada en alimentación y vivienda conforme la tabla visible en la pág. 186 y lo admitido por el empleador y la trabajadora en un contrato de transacción suscrito entre ambos sin vicio alguno; para oponerse a las pretensiones de la demanda adujeron que las prestaciones sociales siempre le fueron pagadas a tiempo a la demandante y conforme a los arts. 2º del Acuerdo 049 de 1990, 17 y 31 de la Ley 100 de 1993 la demandante no era afiliada obligatoria al sistema de pensiones al momento de celebrar el contrato de trabajo y Colpensiones se negó a afiliarla como su trabajadora, quien además presentó su renuncia en forma voluntaria sin haber elevado reclamación alguna con anterioridad. Propusieron las excepciones de inexistencia de la obligación, cosa juzgada, prescripción y aceptación de la herencia con beneficio de inventario (págs.. 183-207 archs. 4, 9 C01).

Teniendo en cuenta que Gustavo León Castaño Posada falleció el 26 de enero de 2020 (págs. 210, 211 arch. 4 C01), en audiencia del art. 77 del CPTSS celebrada el 25 de julio de 2022, se declaró a los hermanos demandados Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez como sucesores procesales de su padre fallecido (archs. 12-14 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022, declaró que entre la demandante y Gustavo León Castaño Posada (QEPD) existió un contrato de trabajo entre el 30 de julio de 2003 y el 30 de mayo de 2015 y, como consecuencia de ello le asiste el derecho a la demandante al pago de \$13.153.312 por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por todo el tiempo laborado sin afiliación ni pagos a la seguridad social en pensiones, cuyo desembolso está a cargo de *«la masa sucesoral (...) compuesta por Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez»*; condenó a la masa sucesoral así compuesta al pago de las costas procesales para lo cual fijó como agencias en derecho la suma de \$1.500.000; declaró probada las excepciones de pago y cosa juzgada frente a salarios deficitarios, prestaciones sociales e indemnizaciones moratorias y *«fundada la excepción de prescripción de dichos emolumentos»*.

Para lo que interesa a la alzada, señaló que dentro de la documental aportada solamente se identificó a Gustavo León Castaño Posada (QEPD) como empleador de la demandante, quien desempeñó oficios de carácter doméstico, motivo por el cual, los restantes demandados fungen como sucesores procesales al tenor de lo dispuesto en el art. 68 del CGP y en tal calidad responden por pasiva pues basta que hayan acreditado el parentesco con el verdadero empleador *«sin que sea necesario que al proceso acrediten la adjudicación del trabajo de sucesión como tal, están legitimados como parte por el solo hecho de tener el parentesco; si en algún momento, alguna consecuencia condenatoria sale en contra de la parte pasiva, la sentencia emerge a cargo de la masa sucesoral»*.

Agregó que no hay lugar al pago de las acreencias laborales reclamadas pues se debe tener en cuenta la transacción suscrita entre la demandante y su empleador el 2 de julio de 2015 en la que quedaron cobijados todos los emolumentos pendientes de pago, incluso las indemnizaciones, en todo caso, se encuentran afectadas de la prescripción con la advertencia de que en el derecho de petición del año 2017 solo se pidió la pensión sanción, mas no el pago de salarios deficitarios y prestaciones, por ende, no tiene la virtud de suspender la prescripción.

En relación con la renuncia, señaló que aun cuando el pago realizado a la demandante no fue completo, sí fue oportuno y lo demás quedó saldado con el acuerdo transaccional, tampoco hay prueba de que se le hayan efectuado descuentos ilegales, injustos y no autorizados del salario; no se acreditaron los gastos en que tuvo que haber incurrido en la consecución de su vestido y calzado de labor. Señaló que si bien para el año 2003, fecha en que el empleador intentó inscribir a la demandante al sistema de seguridad social en pensiones, ella no era afiliada obligatoria según el art. 17 de la Ley 100 de 1993 porque tenía más de 60 años de edad, ello resulta un acto discriminatorio porque el hecho de tener una edad avanzada no es impedimento para vincularse al mercado laboral; sin embargo, no emerge del empleador de la demandante una actitud negligente, porque no era clara la obligación de aquel frente al sistema, de manera que ordenó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez liquidada con base en el art. 37 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1730 de 2001 y 1 SMLMV, porque no procede el reconocimiento de la pensión sanción al no haber un despido injusto, ni resulta viable ordenar el

cálculo actuarial dado que la demandante no tuvo una afiliación registrada en algún fondo de pensiones, ni siquiera con anterioridad a la Ley 100 de 1993, siendo que ella tenía la obligación de elegir y para la edad que tiene, sería un despropósito condenar al pago de dicho cálculo, por ser sumamente oneroso cuando no reúne los requisitos para que le sea reconocida la pensión de vejez, ni es beneficiaria de un régimen de transición (arch. 21, 22 C01).

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

La demandante manifestó que ha debido declararse solidariamente responsables a los demandados, dado que todos fueron sus empleadores, desde antes del fallecimiento de Gustavo León, además porque quedó claro que ellos sí la conocían desde que iban a la escuela, crecieron, se volvieron profesionales y se casaron, dado que incluso laboró para Olga, madre de aquellos, y trabajó para la misma familia como bien podría demostrarse si se llama a declarar en segunda instancia a todos los demandados; todos ellos a quienes ayudó a criar, son sus empleadores y por ende, deben responder por el pago de sus acreencias laborales. Afirmó que era obligación del empleador haberla afiliado al sistema general de pensiones y aquí no se acreditó que en verdad él hubiera tratado de afiliarla como para que un fondo de pensiones se haya negado a hacerlo por tener una avanzada edad.

Tampoco se acreditó de manera idónea que se hubiera pactado el salario en especie, ni se aportó un cálculo del cual se pudiera inferir que se le pagaba el 30% en alimentación. Agregó que no es que hubiera querido renunciar sino que sistemáticamente se le estaban vulnerando sus derechos durante más de 10 años, por ello presentó la renuncia motivada para ponerle de presente a sus empleadores que no se encontraba conforme, de ahí que se configura un despido indirecto pues no soportaba el trabajo a su avanzada edad, además todo lo que expuso en la renuncia fue probado, tanto es así que se tuvieron que hacer los reajustes a los salarios porque se trató de descuentos del mencionado 30% por alimentación, que nunca autorizó.

Señaló que por su avanzada edad, fatiga y enfermedad, se sintió acosada y por ello firmó la transacción. Frente a la prescripción, alegó que no se tuvo en cuenta un derecho de petición en donde se reclamó la pensión, sin que sea necesario que se hubiera presentado el mismo de una manera detallada sobre cada pretensión, por ende, sí se interrumpió la prescripción de conformidad con

el art. 489 del CST, así que no habría prescripción, porque la demanda se presentó dentro de los 3 años del reclamo. Agregó que hubo mala fe de los demandados, quienes incluso esperaron por mucho tiempo para notificarse de la demanda, dilataron el tiempo sin tener en cuenta su avanzada edad y por tal motivo es procedente la indemnización del art. 65 del CST. En consecuencia, solicita que se concedan todas las pretensiones invocadas y se decrete como prueba el interrogatorio de parte a los demandados para que ellos mismos narren de qué manera la conocieron.

La parte **demandada** considera que no ha debido imponerse la condena mencionada, porque insiste en que para el momento en que inició la relación laboral, la demandante tenía 67 años de edad, y para esa data no existía la obligación para Gustavo León Castaño de afiliarla, siendo ello solo posible a través de una acción de tutela para que los fondos de pensiones afilien a personas mayores de edad, aunado a que la demandante no acreditó que tenía semanas cotizadas con anterioridad o que antes de iniciar el vínculo, se hubiera afiliado al sistema como para tener una expectativa de obtener una pensión. Agregó que el valor de las costas no corresponde con la afirmación efectuada por el *a quo* relativa a que debía aligerarse esa carga teniendo en cuenta la conducta de Gustavo León Castaño (QEPD), pues realmente corresponden a más del 10% del monto de una condena que no es válida. Solicitó que no se vuelva a decretar el interrogatorio de parte solicitado por la demandante y que por el contrario, se tenga en cuenta que el contrato de transacción fue firmado por ella.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 12 de enero de 2023 se admitieron los recursos de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 31 de marzo siguiente, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, sin embargo, solo presentaron alegaciones los demandados quienes insisten en los argumentos expuestos en las contestaciones a la demanda y la apelación (archs. 2-4 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver los recursos de apelación de las partes, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar, **i)** la viabilidad de decretar los interrogatorios de parte a los demandados; **ii)** si los hermanos demandados Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez tuvieron la calidad de empleadores frente a la demandante **iii)** si es procedente acceder al pago de las acreencias laborales relativas a los reajustes y quién(es) estaría(n) obligado(s) a su pago, o si por el contrario, estas se encuentran cobijadas por los efectos de la cosa juzgada o de la prescripción; **iv)** si es procedente imponer el pago de la indemnización moratoria del art. 65 del CST; **v)** si se configuró un despido indirecto que dé paso a la pensión sanción solicitada en forma principal; **vi)** si la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es procedente; **vii)** se estudiará si es viable modificar el monto impuesto como costas procesales en primera instancia.

Pruebas en segunda instancia.- Al no reunirse los presupuestos contenidos en el art. 83 del CPTSS, se **rechaza** la petición elevada por la demandante, porque solo de manera excepcional la norma permite que el Tribunal, previo a resolver la apelación, disponga la práctica oficiosa de los medios que estime conducentes para definir el asunto; sin embargo, ello en modo alguno puede conducir a que se supla la inactividad, negligencia o incuria de las partes, sino por el contrario a que se subsanen deficiencias que no les sean atribuibles y que permitan definir el asunto (CSJ SL1002-2015, CSJ SL13657-2015, CSJ SL3717-2016), lo que aquí no ocurre en torno a los interrogatorios de parte peticionados, pues ya fueron decretados y practicados en primera instancia en la audiencia celebrada el 25 de julio de 2022, y fue el apoderado de la parte actora quien formuló las preguntas a cada persona que conforma la parte pasiva al margen de que hubiera llevado a cabo en forma correcta o no la técnica procesal con la que se practica este tipo de prueba (archs. 13, 14 C01).

Relación laboral con Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez -. Para determinar la naturaleza jurídica del vínculo, debe verificarse si concurren los elementos esenciales del contrato de trabajo, previstos en el art. 23 del CST, modificado por el art. 1º de la Ley 50 de 1990,

que son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia respecto del empleador y el salario como retribución del servicio, teniendo en cuenta la presunción legal prevista en el art. 24 *ibídem*, modificado por el art. 2º de la Ley 50 de 1990, respecto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, correspondiéndole simplemente a quien alega su existencia, acreditar la prestación del servicio personal y, quien resiste la pretensión, debe derruir la presunción, desvirtuando la existencia de los demás elementos esenciales del contrato de trabajo, y acreditando los elementos de una relación de naturaleza jurídica distinta (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015, y CSJ SL1420-2018).

Y demostrada la prestación personal del servicio, corresponde al funcionario judicial desentrañar con los medios probatorios aportados al proceso, establecer los extremos temporales en un determinado periodo, y con ello poder calcular los derechos laborales o sociales que le corresponderían al trabajador demandante (CSJ SL111-2018).

Sin embargo, nuestra legislación procesal ha instituido una serie de obligaciones, derechos, facultades y cargas atribuibles a todos aquellos que forman los distintos extremos que componen la relación jurídico-procesal, por lo que de antemano, quien pretenda acudir ante la administración de justicia en calidad de demandante debe conocer como mínimo, las responsabilidades propias de su condición, lo que se hace necesario para imprimir una mayor seriedad, diligencia y presteza a todos los asuntos conocidos por la jurisdicción.

De manera que, no bastaba con que la demandante afirmara en el libelo introductor que se desempeñó como empleada del servicio doméstico en favor de los hermanos Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez, y que por tal motivo tuvo una relación laboral con ellos entre los años 2003 y 2015, sino que debió demostrar en juicio, qué clase de labores diarias desarrolló para cada uno de ellos; carga probatoria que corría en cabeza de ella, al tenor de lo dispuesto en los arts. 164 y 167 del CGP, pero que no cumplió, porque no ejecutó ningún acto tendiente a demostrar tales aspectos, de los interrogatorios de parte que solicitó en su favor no formuló una pregunta certera, válida y con la técnica adecuada, con el fin de obtener una confesión, y además, desistió de los testigos que fueron decretados en su favor (archs. 13, 14 C01).

Por otra parte, en las acciones de tutela presentadas ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías con radicado 2019 00100 y ante el Juzgado 37 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín con radicado 05001 40 09 037 2017 00255 00¹, la demandante adujo en los hechos allí expuestos, que quien la contrató fue Gustavo León Castaño Posada y dijo respecto de los demás demandados, que Olga Inés solo pasaba la temporada de fin de año en casa de su padre, y Gustavo Adolfo compartía en casa del difunto los fines de semana, donde ella prestaba los servicios (págs.. 103-109, 163-168 arch. 4 C01.); aquí debe tenerse en cuenta también, que Olga Inés acreditó mediante certificación del Consulado de Colombia en Estados Unidos, expedida el 2 de enero de 2019, que vive en Miami - Florida desde el año 1994, domicilio indicado de igual forma en la Escritura Pública n.º 154 otorgada el 29 de enero de 2020 ante la Notaría 4ª del Círculo de Medellín (págs. 148, 212-219 *ídem*), mientras que su hermano Gustavo Adolfo, aportó el certificado de libertad y tradición del bien inmueble en el que adujo residir con su esposa Eileen Yolanda Orozco Portillo desde el año 2004, ubicado en la Calle 33 AA Sur n.º 26 A – 30 Lote y Casa n.º 187 (págs. 130-140 *ídem*).

Ahora, las afirmaciones realizadas en la apelación, relacionadas con el hecho de que la demandante ayudó a criar desde muy pequeños a estos 3 demandados, se desvirtúan totalmente con el material probatorio porque, en primer lugar, desde el libelo introductor sostuvo que el vínculo laboral inició en el año 2003 y si se observan los registros civiles de nacimiento allegados de los demandados (arch. 12 C01), se constata que para esa data ya eran mayores de edad, algunos no vivían en casa de sus padres para el año 2003 y además, en sus interrogatorios de parte, admitieron conocer a María Deyanira, porque trabajó en casa de su padre, en los siguientes términos:

Olga Inés, señaló que nació en el año 1966, conoció a la demandante porque asistió a su padre, hoy fallecido, Gustavo León Castaño Posada, que cuando lo visitaba la veía trabajando en labores de cocina y de limpieza, pero iba una vez al año, motivo por el que no tenía conocimiento del tipo de contratación que efectuó aquel con la demandante y mucho menos la forma de pago y horario pactados entre las partes. Estas situaciones las relató igualmente María Cecilia, quien nació en el año 1976 y agregó que la demandante laboró para su padre, unos años después de que su madre María

¹ Que fue declarada improcedente en fallo proferido el 14 de noviembre de 2017, confirmado el 13 de diciembre siguiente por el Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento (págs.. 120-129 arch. 4 C01).

Olga Rodríguez Arango falleciera y para esa época ella no vivía con su progenitor, ya que estaba fuera de la ciudad, solo lo visitaba de vez en cuando y sabía que la demandante vivía en la casa de él, lo acudía, situación que le consta porque cuando iba de visita también le preparaba alimentos a ella, también María Deyanira lo cuidó luego de haber sufrido un infarto, pero no sabe cuál fue el salario pactado entre ellos.

Estas actividades ejercidas por la demandante, las relató igualmente Gustavo Adolfo en su interrogatorio de parte, quien nació en 1970 y es casado desde 1997 con Eileen Orozco, dijo haber visitado muy esporádicamente a su padre en su casa, quien era el empleador de María Deyanira y le pagaba el sueldo, sin saber los pormenores de la relación laboral. La testigo Eileen Yolanda Orozco Portillo, esposa de Gustavo Adolfo, con quien vive desde 1997 dijo que si bien éste iba a visitar a su suegro, ello ocurrió hasta el 2004 cuando les robaron el vehículo a mano armada al salir de la casa de su suegro, afirmó que volvieron a visitarlo mucho tiempo después y solo una o dos veces al año porque Gustavo León se encontraba muy enfermo; y debido a que visitaba a su suegro tenía conocimiento de que la demandante laboraba en la casa de él.

De esta manera, no es posible establecer la prestación de los servicios en favor de los hermanos demandados Olga Inés, María Cecilia y Gustavo Adolfo Castaño Rodríguez, por lo que no se logra activar la presunción del art. 24 del CST a la que se hizo alusión al inicio de las consideraciones, mucho menos se desprende una responsabilidad solidaria en los términos solicitados por la apelante, quien por el contrario, en su interrogatorio de parte, sostuvo que su empleador fue el padre de ellos, Gustavo León Castaño Posada (QEPD), confesión que reafirma lo que se desprende del restante material probatorio y con el cual se llega a la misma conclusión a la que arribó el *a quo*, relativa a que el demandado hoy fallecido, fue el único empleador de la demandante.

Lo anterior se afirma porque obran liquidaciones del 3 [sic] de julio de 2003 al 2 de julio de 2004, y las semestrales subsiguientes del 2 de enero, del 2 de julio y del 31 de diciembre de 2005, del 30 de junio y del 31 de diciembre de 2006, del 30 de junio y del 30 de diciembre de 2007, del 30 de junio y del 31 de diciembre de 2008, 30 de junio y 31 de diciembre de 2009, 30 de junio y 30 de diciembre de 2010, 30 de junio y 30 de diciembre de 2011, 30 de junio y 30 de diciembre de 2012, 30 de junio y 30 de diciembre de 2013, 30 de junio y 30 de diciembre de 2014 y la última del 30 de mayo de 2015 efectuadas por Gustavo

León Castaño Posada y firmadas por la demandante en constancia de recibido, en donde se establece que allí se le reconocieron unas sumas a título de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, y bonificaciones, teniendo en cuenta que el cargo desempeñado por la demandante fue el de Oficios Domésticos (págs.. 19-62 arch. 4 C01).

Además, en el contrato de transacción del 30 de junio de 2015, se adujo que Gustavo León Castaño Posada actuó en calidad de ex empleador y la demandante María Deyanira Monsalve de Rodríguez, como su ex trabajadora del servicio doméstico interno (págs., 65-68, 111-114 arch. 4 C01), documento que la demandante admitió en el interrogatorio de parte haber firmado, con el respectivo pago de la suma transada por parte de Gustavo León. En consecuencia, se **confirma** lo decidido por el *a quo* en el numeral **primero** de la sentencia apelada, frente a quién fue el empleador de la demandante.

Acreeencias laborales e indemnizaciones moratorias - cosa juzgada parcial.- El art. 303 del CGP, establece que para que se configure la cosa juzgada, el nuevo conflicto debe versar sobre el mismo objeto, tener la misma causa y debe existir identidad de partes; sea el caso advertir que las decisiones finales que haya resuelto el primer litigio, adquieren el carácter de definitivas e inmutables, lo que confiere a las partes en contienda seguridad jurídica respecto de lo resuelto, pues justamente uno de los propósitos de la figura estudiada es evitar que sobre los mismos hechos se dicten decisiones contrarias o que un mismo conflicto se resuelva en tiempos diferentes y en formas inversas.

En este asunto se advierte que la excepción de cosa juzgada se propone con fundamento en el acuerdo transaccional celebrado entre Gustavo León Castaño Posada y la demandante el 30 de junio de 2015 (págs., 65-68 arch. 4 C01); por lo que vale la pena señalar en este punto, que según el art. 2469 del CC, se trata de un contrato que suscriben las partes con el fin de terminar un litigio surgido entre ellas o para precaver un litigio eventual, y a diferencia de la conciliación, la transacción no se realiza con la intervención de alguna autoridad, sino que basta la manifestación escrita de las partes de que llegaron a un acuerdo sobre el punto litigioso o eventual litigio, para que esta tenga plena validez, así que se encuentra acreditado que en el caso de autos existe identidad de partes.

De otra parte, el art. 15 del CST dispone que en los asuntos del trabajo la transacción es válida salvo que se trate de derechos ciertos e indiscutibles; y según la jurisprudencia ordinaria laboral estos corresponden a aquellos cuya previsión normativa resulta inequívoca, concurriendo además los supuestos de hecho exigidos a favor de quien los reclama, de suerte que, cuando no existe norma que expresamente los contemple, o hay imprecisión, oscuridad, ambigüedad, confusión o vacío en estas, o simplemente no se acreditan los supuestos de hecho requeridos, o precepto alguno que exima de aportarlos al proceso, o cuando no obstante aparecer como acreditadas sus exigencias su reconocimiento pueda verse afectado por hechos que impidan su nacimiento, o lo modifiquen o, incluso lo extingan (CSJ SL., 4 jul. 2012 rad. 48101); es decir, el carácter de cierto e indiscutible de un derecho que impide que sea materia de transacción o de conciliación, no surge automáticamente porque esté contemplado en una norma jurídica, sino cuando el interesado o beneficiario indiscutiblemente cumple los supuestos de hecho o las condiciones establecidas en esa norma que lo consagra, por lo que, en ese sentido, un derecho se considera cierto, real, o innegable, cuando no exista duda sobre su existencia y la de los hechos que le dan origen, y se establezca con certeza que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad (CSJ SL., 14 dic. 2007 rad. 29332).

La transacción estructura sus límites sobre la base de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad, los cuales básicamente hacen referencia a la imposibilidad de renunciar, a los derechos y prerrogativas mínimas que concede el ordenamiento jurídico (art. 14 del CST), y la imposibilidad de negociar los derechos laborales, en normas que son orden público, pero en el entendido de que ese derecho se tenga, porque un trabajador no podría disponer, ni renunciar respecto de algo que no tiene, o de lo que no existe razonable certeza de que ineludiblemente debía ingresar a su patrimonio.

En el presente caso, no cabe duda de la identidad de partes, pues se allegó un contrato de transacción suscrito el 30 de junio de 2015 entre Gustavo León Castaño Posada (QEPD) y la demandante; también existe identidad de objeto y causa, por lo menos frente a lo que tiene que ver con el pago del trabajo en tiempo suplementario, salarios insolutos, el reajuste de las cesantías, de los intereses a las cesantías y de las vacaciones, la indemnización moratoria y la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990 que se reclaman en juicio, porque en dicho convenio se dejó establecido que el contrato de trabajo

verbal a término indefinido estuvo vigente desde el 30 de julio de 2003 al 30 de mayo de 2015, día en el que María Monsalve presentó su renuncia por escrito, tiempo en el que devengó 1 SMLMV pagadero el 70% en efectivo y el 30% en especie debido a la alimentación y vivienda recibida por la ex trabajadora.

Sin embargo, se adujo en la transacción que, como el empleador siempre liquidaba cada año [sic] a la trabajadora *«a pesar de que la relación laboral era continua»*, teniendo en cuenta solo el 70% del SMLMV y sin haber consignado las cesantías en un fondo conforme lo dispone la Ley 50 de 1990, se pactó el pago de \$10.000.000 mediante cheque de gerencia de Bancolombia a nombre de María Monsalve y sin restricciones o cruces, con el fin de cubrir los derechos ciertos e indiscutibles de la demandante, tales como cesantías de la relación laboral que no fueron pagadas en debida forma y el reajuste de la liquidación de las prestaciones sociales canceladas cada año *«teniendo como base el salario mínimo legal que devengaba»*, ya que las *«cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones compensadas en dinero y demás derechos ciertos que se adeudan de todo el tiempo laborado fueron pagados en la debida oportunidad, pero en forma parcial»*.

Además se estableció que la sanción por no consignación de las cesantías y la indemnización moratoria son derechos inciertos y discutibles, pero transigidos en la suma acordada dado que por una parte, las partes concertaron que prescribió lo relativo a los años 2003 a 2011 y frente a los años 2012 a 2014 se consideró que el empleador actuó de buena fe; por otra parte, indicaron que serían hechos para probar en un eventual proceso laboral, por lo que la transacción *« está orientada a dar por terminado el litigio existente entre las partes, pues es voluntad de ellas que con este acuerdo queden definitivamente solucionadas todas las diferencias que se han presentado entre ellos en materia salarial, específicamente los conceptos de horas extras diurnas y recargos por trabajo nocturno y dominical, y en general todos los conceptos derivados de la relación laboral, pues la conciliación versa sobre todas y cada una de las pretensiones de la demanda»*, declarando al ex empleador a paz y salvo por todo concepto laboral *«sin que en la formación del consentimiento hayan concurrido vicios como error, fuerza y dolo»*, y con la ratificación de que la transacción celebrada tiene efectos de cosa juzgada (págs., 65-68, 111-114 arch. 4 C01). Se itera que, en el interrogatorio de parte la demandante admitió que la firma allí impuesta, es suya y, que recibió el dinero transado por parte de Gustavo León.

Así las cosas, se pactó entre las partes la superación de una controversia ligada a la naturaleza jurídica de la relación contractual que las vinculó, lo que fue aceptado por la demandante, y que, en todo caso, devino en el reconocimiento de una suma de dinero que no implicó la renuncia a unos derechos laborales, sino la compensación económica para precaver cualquier litigio eventual frente al tema, pues de lo que se trata el presente proceso es de demostrar la viabilidad del pago del trabajo en tiempo suplementario, si hubo salarios insolutos, la procedencia del reajuste de las cesantías, de los intereses a las cesantías y de las vacaciones, y de determinar la posibilidad de imponer tanto la indemnización moratoria como la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990; sin que aquí se hubieran acreditado circunstancias que den lugar a declarar la nulidad del acuerdo transaccional, máxime cuando en el mismo, la demandante dejó plasmada de manera expresa su voluntad al firmarlo.

De manera que, para la Sala es claro que dicho documento firmado por ambas partes, y autenticado por la demandante 2 días después, en la Notaría 10ª del Círculo de Medellín, tiene como naturaleza jurídica la de ser un acuerdo o contrato de transacción regido por el art. 2483 del CC, que produce efectos de cosa juzgada y, no resulta viable que el juez ordinario reabra debates sobre los aspectos controvertidos en dicha actuación, menos cuando la parte demandante no pidió su ineficacia o nulidad por algún defecto sustancial (CSJ SC de 29 jun. 2007 rad. 6428, reseñada en la CSJ SL2833-2017).

Así las cosas, resultaba procedente declarar probada parcialmente la excepción de cosa juzgada, que produce el acuerdo de transacción, sin que el juez ordinario pueda inmiscuirse en el mismo, salvo que alguna de las partes alegue algún defecto sustancial en su contenido, lo cual aquí no aconteció; y sobre ese acto no se hizo ninguna manifestación. En ese orden, se **confirma** lo así decidido en el numeral **primero** de la sentencia impugnada y **parcialmente** el numeral **cuarto**, con la precisión de que como dentro de la transacción se incluyó lo relativo a la indemnización moratoria del art. 65 del CST no es viable su estudio e imposición en los términos solicitados en la apelación.

Despido indirecto – pensión sanción.- Al respecto, es necesario precisar que es la parte actora quien debe demostrar conforme el art. 167 del CGP, no solo que la motivación de la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral le fue comunicada al empleador con claridad y

precisión, sino que tal determinación estuvo sustentada en hechos que, primero, ocurrieron, y segundo, pueden subsumirse en alguna o algunas de las causales previstas en el lit. b) del art. 7º del Decreto 2351 de 1965, que reformó el art. 62 del CST (CSJ SL 9 ago. 2011 rad. 41490, CSJ SL2412-2016, CSJ SL18344-2016 y CSJ SL14877-2016), es decir, que la causa de su renuncia fue atribuible al empleador, misma que debe aducirse a la terminación (par. art. 62 del CST - CSJ STL4852-2014). Si el trabajador acredita lo anterior, el empleador debe asumir las consecuencias pertinentes, empero si aquel no logra probar tal incumplimiento, necesariamente la conclusión será que la terminación del contrato de trabajo obedeció a una dejación libre y espontánea por parte del trabajador (CSJ SL 26 jun. 2012 rad. 44155, CSJ SL1514-2018).

No fue objeto de discusión que el vínculo terminó el 30 de mayo de 2015 por renuncia voluntaria, así se desprende de la transacción a la que se hizo referencia en líneas anteriores (págs., 65-68, 111-114 arch. 4 C01), de la última liquidación del contrato de trabajo efectuada el 30 de mayo de 2015 por Gustavo León Castaño Posada y firmada por la demandante en constancia de recibido (págs.. 61, 62 *ídem*), y del documento mediante el cual la demandante presentó la renuncia que fue enviada por correo postal de Servientrega el 30 de mayo de 2015 (págs. 63, 64, 110, 169 *ídem*).

Dicha renuncia se dirigió a todos los demandados y allí la demandante adujo que sería efectiva a partir el 30 de mayo de 2015 por vulneración constante y reiterativa de su contrato de trabajo y de sus derechos laborales, debido a la falta de pago completo y oportuno del salario, a la falta de afiliación a la seguridad social integral, a los descuentos ilegales, injustos y no autorizados del salario, a la falta de entrega de calzado y vestido de labor y por el maltrato verbal al que se vio sometida por parte de Gustavo León Castaño Posada, así que solicitó la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales *«pues de lo contrario acudiré a los jueces laborales en procura de mis derechos»* (págs. 63, 64, 110, 169 arch. 4 C01).

Contrario a lo que concluyó el *a quo*, esta Sala de decisión considera que sí se encuentran probadas las situaciones expuestas por la demandante en su escrito en el que expresó su molestia, con las situaciones descritas posteriormente en el contrato de transacción al que se ha hecho referencia, suscrito el 30 de junio de 2015, es decir, un mes después de haberse presentado la renuncia y de que el empleador liquidara por última vez a su ex

trabajadora; además, allí se admitió que la renuncia se presentó por escrito y que en efecto, hubo pagos deficitarios de las acreencias laborales, dado que siempre fue liquidada teniendo en cuenta solo el 70% del SMLMV, sin haber consignado las cesantías en un fondo conforme lo dispone la Ley 50 de 1990. Aunado a ello se aceptó que la demandante nunca fue afiliada al subsistema general de pensiones, porque para el momento en que inició el contrato de trabajo tenía más de 57 años de edad (págs., 65-68 arch. 4 C01).

Así que, basta lo allí relatado por el propio empleador, para establecer que en efecto, hubo un incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte de Gustavo León, de sus obligaciones legales frente a la trabajadora, y de ninguna manera puede considerarse subsanada tal omisión con el pago que se efectuó años después con la transacción de los saldos insolutos que le correspondían a la trabajadora, como lo dedujo en forma desafortunada el *a quo*.

Lo anterior se hace más evidente porque, contrario a lo que parecen entender los demandados y el *a quo*, María Deyanira Monsalve **sí** era afiliada obligatoria del sistema general de pensiones, porque si bien en su momento, los reglamentos internos del ISS específicamente lo dispuesto en los art. 2, 14 y 24 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con lo dispuesto en los Decretos 3041 de 1966 y 433 de 1971, contemplaban una exclusión del seguro de invalidez, vejez y muerte frente a «los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez en el Régimen de los Seguros Sociales, tengan 60 o más años de edad», lo cierto es que tal exclusión desapareció con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, porque los arts. 13 y 15 en su redacción original establecieron que serán afiliados al Sistema General de Pensiones en forma obligatoria «Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo» lo que se ratificó con la modificación introducida por los arts. 2º y 3º de la Ley 797 de 2003 al señalar que «La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes»; además en la redacción original del art. 17 de la Ley 100 se impuso la obligatoriedad de las cotizaciones en pensiones «[d]urante la vigencia de la relación laboral (...) por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen», disposición que se mantuvo con la modificación del art. 4º de la mencionada Ley 797.

De manera que, a partir del nuevo Estatuto de la seguridad social, no se prevé ninguna exclusión al sistema general de pensiones, frente a aquellas personas que lleguen a la edad mínima exigida para generar la pensión de vejez y tengan un vínculo laboral vigente, de ahí que no hay lugar a acudir al art. 31 de la Ley 100 porque el asunto de los afiliados obligatorios del sistema por situaciones que se configuren en vigencia de esta normativa fue expresamente regulado, resultando obligatorio para el empleador reportar la novedad de la afiliación al sistema general de pensiones de su trabajadora dependiente, desde el día en que inició el vínculo contractual y cancelar los aportes al sistema general de pensiones, con el fin de que la trabajadora pudiera acceder al reconocimiento de las prestaciones económicas que se establecen en dicho estatuto, en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, siempre y cuando se cumplan los requisitos allí consagrados.

Esta interpretación ha sido pacífica para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencias CSJ SL2340-2022, SL1075-2022, CSJ STL2895-2022, CSJ SL3321-2021, CSJ STL3403-2021, CSJ SL4698-2020, CSJ SL2991-2020, ha establecido que el hecho de superar la edad mínima prevista para causar el derecho a la pensión de vejez no constituye un parámetro válido de exclusión del sistema, ni siquiera a la luz de lo dispuesto en el lit. b) del art. 61 de la Ley 100 de 1993, porque el impedirle a esta población mayor económicamente activa acceder al mismo, es abiertamente discriminatorio y desconoce sus capacidades productivas, útiles a la sociedad por su experiencia y conocimiento, por tanto su afiliación se predica válida; aunado a que dicha Corporación ha considerado en forma reiterada que *«[e]l trabajo efectivo, desarrollado en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional de los trabajadores afiliados al mismo»* (CSJ SL1922-2022).

En virtud de lo anterior, **sí** hubo una omisión en la afiliación de María Deyanira Monsalve, por parte de su empleador Gustavo León Castaño Posada, lo que también generó el incumplimiento sistemático de las obligaciones legales de este por no efectuar los aportes obligatorios al sistema general de pensiones en favor de su ex trabajadora; además, no es atendible la afirmación del empleador respecto a que no pudo afiliar a la demandante por contar con más de 57 años de edad en el momento de la celebración del contrato de trabajo, tal y como se sostuvo en la transacción al señalar que tal situación sucedió porque *«de acuerdo a [sic] Colpensiones, la trabajadora ya había cumplido la edad para*

acceder a la pensión, sin que hubiese cumplido con el número de semanas necesario para acceder a la pensión de vejez» (págs., 65-68 arch. 4 C01), pues quien pretende demandar un derecho o quien se opone o excepciona, está obligado a alegar y demostrar los hechos en que funda su solicitud (CSJ SL 20 marz. 2013 rad. 45120 y CSJ SL 6 sept. 2012 rad. 37804).

Empero, teniendo la carga de acreditar esta gestión de conformidad con los arts. 164 y 167 del CGP, la parte demandada no aportó ningún medio probatorio con el cual pudiera advertirse que en efecto, intentó afiliar a su trabajadora y que por razones externas y ajenas a su voluntad ello no fue posible, tampoco allegó cruce de correspondencia que hubiera podido existir entre el empleador y las distintas administradoras del sistema general de pensiones ya hubiera sido del RAIS o del RPMPD, siendo del caso recordar que es el empleador el único responsable de realizar la afiliación y el pago de los aportes al sistema general de pensiones -incluido el porcentaje que le corresponde al trabajador-, tal como lo prevé el art. 22 de la Ley 100 de 1993.

Nótese que incluso el *a quo* envió oficios a Porvenir SA y a Colpensiones con el fin de indagar si en vigencia de la relación laboral sostenida entre la demandante y Gustavo León *«obró afiliación en pensiones (...) si hubo pago de cotizaciones de algún empleador (...) si algún empleador realizó afiliación en pensiones y pagó cotizaciones»* en favor de la demandante, pero estas entidades informaron el 1º y el 10 de agosto de 2022 que la demandante no estaba afiliada, ni se evidenciaron aportes a su nombre, o novedades laborales (archs. 15-19 C01); documental esta de la que no se desprende en modo alguno que Colpensiones o Porvenir SA le negó la posibilidad al empleador Gustavo León, de afiliar a María Deyanira.

En consecuencia, el despido indirecto sí quedó debidamente demostrado con la renuncia originada en omisiones que el mismo empleador admitió, sin que el hecho de que se haya mencionado en la transacción que María Deyanira renunció, le quite el carácter de despido indirecto porque el escrito de terminación fue motivado y se acreditó que la causa para ello fue lo dispuesto en el num. 6º del lit. b) del art. 62 del CST, esto es *«incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales»*, lo que conlleva la **justeza** de la terminación del contrato de trabajo por parte de la trabajadora, por causas imputables a Gustavo León Castaño, lo que en suma constituye un despido indirecto.

Así las cosas, para resolver lo relativo a la **pensión sanción** que fue solicitada en forma principal en la demanda, esta Sala trae a colación lo previsto en el art. 133 de la Ley 100 de 1993, que reformó el art. 267 del CST, según el cual el trabajador *no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante 10 años o más, y menos de 15 años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de esta ley, tiene derecho a que el empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos en el caso de las mujeres, 55 años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad, si este evento ocurre con posterioridad al despido injusto.*

La falta de afiliación al subsistema de pensiones quedó plenamente admitida por el empleador en los términos antes analizados; el tiempo de duración del contrato celebrado entre María Deyanira y Gustavo León fue un hecho indiscutido, con lo que se tiene que tuvo vigencia durante 11 años y 10 meses; la terminación del contrato de trabajo sin justa causa se acreditó con la renuncia motivada en los pagos deficitarios efectuados por el empleador con la que se configuró un despido indirecto, sin que lo relativo a este aspecto o al pago de aportes a pensión hubiera quedado incluido dentro de las cláusulas convenidas en el contrato de transacción; y la edad de los 55 años ya la había superado con creces la demandante, pues al nacer el 7 de junio de 1936 (pág. 118 arch. 4 C01), contaba para la época del despido imputable al empleador, con 78 años.

En consecuencia, encuentra la Sala que, en efecto, la demandante tiene derecho a la pensión sanción consagrada en el art. 133 de la Ley 100 de 1993, prestación que, como se sabe, fue instituida como reacción al grave incumplimiento del empleador de no afiliar a sus trabajadores al sistema de pensiones y, por esa vía, cercenarles la oportunidad de obtener una prestación periódica que garantice su subsistencia digna durante su vejez (CSJ SL6621-2017). Así las cosas, se **revocará** la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que fue condenado el empleador, para en su lugar, ordenar el pago con cargo a la masa sucesoral de Gustavo León Castaño Posada (QEPD), de la pensión sanción en favor de la demandante en cuantía de 1 SMLMV como quiera que ninguna prestación puede ser inferior a ese monto conforme el art.

35 de la Ley 100, que deberá ser otorgada a partir del día siguiente a la terminación del vínculo laboral a razón de 13 mesadas al año.

Prescripción.- Ninguna de las mesadas a las que tiene derecho la demandante se encuentran afectadas del término prescriptivo de los arts. 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS, comoquiera que no transcurrieron 3 años entre la fecha de la terminación del vínculo laboral (30 de mayo de 2015) y el 3 de abril de 2017, data en que dio respuesta negativa por parte de Gustavo León Castaño en calidad de empleador, al derecho de petición elevado por la demandante, sin fecha, mediante el cual solicitó *«el pago por parte de ustedes de la pensión vitalicia a la que tengo derecho por haber laborado para ustedes durante más de 12 años sin que se me afiliada a la seguridad social integral, especialmente en pensiones»* (págs.. 69- 71, 115-117, 170-172 arch. 4 C01). Tampoco pasó el trienio entre aquella comunicación y la fecha en que se radicó la demanda el 23 de mayo de 2018 (arch. 3 C01). En consecuencia se **modificará parcialmente** el numeral **cuarto** de la sentencia apelada, en el sentido de declarar **no probado** este medio exceptivo.

Por lo anterior, el retroactivo en favor de la demandante asciende a **\$98.531.954**, liquidado hasta febrero de 2024, que deberá ser pagado en forma indexada desde su causación y hasta el pago efectivo, y sin perjuicio de las demás mesadas pensionales que en adelante se sigan causando:

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	8	\$ 644.350	\$ 5.154.800
2016	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	13	\$ 1.160.000	\$ 15.080.000
2024	2	\$ 1.300.000	\$ 2.600.000
		TOTAL	\$ 98.531.954

En estos términos se **revocarán** los numerales **segundo** y **tercero** de la sentencia apelada.

Agencias en derecho.- Finalmente, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho, debe decirse que no es esta la oportunidad procesal para controvertir su monto, en la medida en que el ordenamiento jurídico procesal ha dispensado una oportunidad concreta para ello, como lo es la prevista en el num. 5º del art. 366 del CGP, con los correspondientes recursos contra el auto que aprueba la liquidación de costas procesales realizada en la primera instancia. Por este motivo, la Sala no emitirá pronunciamiento al respecto.

Por no causarse costas en esta instancia, no se impondrá condena por este rubro.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR los numerales **segundo** y **tercero** de la sentencia apelada proferida el 2 de septiembre de 2022 por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, **CONDENAR** a reconocer y pagar en favor de María Deyanira Monsalve de Rodríguez de manera vitalicia, la pensión sanción regulada en el art. 133 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de junio de 2015 en cuantía de 1 SMLMV, cuyo retroactivo liquidado a razón de 13 mesadas anuales hasta el 29 de febrero de 2024, asciende a noventa y ocho millones quinientos treinta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos **(\$98.531.954)**, sin perjuicio de las demás mesadas que se sigan causando y que deberá ser pagado en forma indexada desde su causación y hasta el momento del pago de cada una de las mesadas que lo conforman, con cargo a la masa sucesoral de su empleador Gustavo León Castaño Posada (QEPD); motivo por el cual, se absuelve del pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral **cuarto** de la sentencia apelada, en el sentido de **declarar no probada** la excepción de prescripción, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas.

CUARTO: Sin costas en la instancia ante su no causación.

QUINTO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EvZfDm4c8ulLs8yRev2SOc4BfD5TW881jVXOKa5D_X-zyQ?e=E8bUsN

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 21097b224a65a333c629d91a55acddf9eaa0b1c673e917cc88467e089d42b782

Documento generado en 11/03/2024 03:51:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>